DE CRISIS HUMANITARIAS IGNORADAS Y MITIFICADAS: RWANDA 1994

HILDA VARELA
El Colegio de México

EL ESTALLIDO DE LA PRIMERA crisis humanitaria rwandesa —iniciada en abril de 1994 con las matanzas perpetradas poco después del derribo del avión que transportaba a los presidentes de Rwanda y de Burundi— fue un acontecimiento inesperado e inextricable para la opinión pública occidental. Los principales medios de comunicación internacional observaban que era un conflicto difícil de definir,[1] atribuyéndolo casi de inmediato a la explosión violenta de "impulsos primitivos" de pueblos "salvajes" [*sic*]. De manera paulatina, la crisis de Rwanda empezó a ser manejada en términos maniqueos: un grupo étnico culpable —hutu— y un grupo étnico inocente —tutsi.

Poco tiempo después, tres acontecimientos internacionales volvieron más confusa la lectura de la crisis rwandesa. Por un lado, el gobierno francés decidió desplegar a sus tropas en la zona en conflicto, hecho que fue posteriormente legitimado por Naciones Unidas como una intervención humanitaria, con la sustitución de los soldados franceses por una fuerza de paz de la ONU. Por otro lado, en el mes de junio, los acontecimientos ocurridos a partir de abril de 1994 fueron tipificados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como genocidio (crimen de *lesa humanidad*, que puede ser internacionalmente castigado). Por último, en noviembre del mismo año, dicho Consejo de Seguridad decidió el establecimiento de un tribunal internacional para juzgar los crímenes de *lesa humanidad* cometidos por rwandeses entre los meses de enero a diciembre de 1994.

[1] "Political dialogue the priority, says special representative for Great Lakes region", *UN Chronicle* 33 (12), 1996, p. 45; "Genocide in Rwanda", *The Economist*, 21 de mayo de 1994, p. 45.

En diversos trabajos académicos se afirma que en Rwanda varios factores históricamente gestados —políticos, económicos, ideológicos, psicológicos— estimularon el desarrollo de una estructura social rígida, fuertemente jerarquizada e injusta y de un sistema político cerrado, cimentado en la concentración del poder en una pequeña elite, pero con una gran capacidad para movilizar a amplios sectores sociales mediante la manipulación de un discurso basado en una visión mítica de la realidad, lo que facilitaba un nivel represivo relativamente bajo en comparación con otros países de África subsahariana. Al mismo tiempo, en el nivel internacional el aparato estatal rwandés era reconocido como un régimen con un éxito económico relativo y con legitimidad política. En medio de profundas tensiones latentes, la guerra civil iniciada en Rwanda a finales de 1990, se convirtió en el terreno favorable para el estallido violento de uno de los conflictos político-étnicos más complejos en África subsahariana en la segunda mitad del siglo XX.

Hay notables incongruencias entre esta lectura de la historia rwandesa y los relatos más difundidos en Occidente acerca de la crisis. En este sentido destaca sobre todo la incompatibilidad entre la visión proyectada por los medios de comunicación durante la crisis y el discurso teórico de genocidio y la utilización de la tesis de intervención militar por razones humanitarias para explicar la operación militar extranjera.

En este artículo se explora en la historia rwandesa para destacar qué tanto la deformación de las memorias colectivas de las personas que vivieron la crisis en el nivel interno como la falta de conocimiento de la realidad africana, acentuada por prejuicios raciales introyectados en el imaginario occidental —en el plano internacional—, favorecieron la proyección de una imagen distorsionada de los acontecimientos ocurridos entre abril y julio de 1994 en ese país.

Al hacer tabla rasa de la historia, se falsearon las causas del conflicto, se ignoró la prolongada fase preparatoria del genocidio —entre 1991 y 1993— y se dificultó el análisis de quiénes eran víctimas y quiénes victimarios. Además se calificó como intervención humanitaria a una operación militar extranjera que no fue humanitaria, mientras que se extendía una cortina de humo para ocultar tanto las intervenciones militares extran-

eras —anteriores a abril de 1994— que agravaron el conflicto, :omo la incapacidad de las instituciones internacionales —en :special la Organización de las Naciones Unidas (ONU)— y de os gobiernos occidentales para llevar a cabo una intervención ıumanitaria durante las dos grandes crisis en la región entre 1994 y 1997.

Este trabajo no pretende ser un estudio exhaustivo. El ɔbjetivo es situar la discusión del conflicto de Rwanda en una ɔerspectiva histórica que permita dar sentido a una serie de ıcontecimientos que de otra forma parecen incomprensibles. De acuerdo con este objetivo se destaca la profunda y comple- a naturaleza política de un conflicto que sigue vivo y que no :iene una solución fácil, y se revisan algunos de los argumen- :os manipulados durante la fase más aguda del conflicto en 1994 y que facilitaron la proliferación de explicaciones ahis- :óricas y de mitos racistas. En esta línea de pensamiento, se ɔone en duda, por un lado, la argumentación que pretende :educir el conflicto en ese país al supuesto "primitivismo" de .a población local y, por otro, la existencia de los elementos ıecesarios para calificar como humanitaria la intervención ıilitar extranjera antes mencionada.

El trabajo está dividido en dos partes. En la primera la ındagación histórica permite rastrear los antecedentes del con- flicto político en Rwanda. En la segunda parte, tomando como punto de partida los fundamentos teóricos más aceptados de las tesis del genocidio como crimen internacional y de la inter- vención militar humanitaria, se propone una revisión de la primera crisis humanitaria[2] (abril-julio 1994).

[2] Es importante destacar que aunque se hace mención de la segunda crisis humanitaria —también conocida como crisis de los refugiados— que tuvo lugar entre septiembre de 1996 y enero de 1997 y en cuyo caso existen suficientes datos para tipificarla como genocidio, su estudio excede los límites de este artículo, tomando en cuenta que no fue una crisis esencialmente rwandesa sino regional, que tuvo lugar en la zona este de la República Democrática del Congo (antes Zaire), con la intervención de varios gobiernos africanos.

El contexto histórico

Las raíces del conflicto se encuentran en las relaciones políticas y económicas gestadas hace siglos entre los dos grupos poblacionales más importantes en ese país —bahutu y batutsi—;[3] pero sobre todo en el impacto negativo de la colonización europea en las relaciones entre estos grupos y en el proceso de descolonización y formación del Estado independiente, que marcó el desarrollo de las estructuras económicas, políticas y sociales en las últimas cuatro décadas del siglo XX.

Antes de la colonización

Ubicado en la parte central del continente africano, con una alta densidad de población y numerosas colinas verdes (aunque con escasas tierras agrícolas y suelos frágiles), Rwanda está habitada por tres grupos, cada uno históricamente identificado con una actividad económica predominante:[4] los twas también conocidos como imbunyu (cazadores y alfareros), los hutus (agricultores) y los tutsis (pastores). Los twas —los habitantes más antiguos de la zona— son el grupo poblacional más pequeño y en las últimas décadas su número ha decrecido, corresponde actualmente a menos de uno por ciento de la población total; los hutus constituyen entre 83 y 85% y los tutsis entre 14 y 16. Ninguno de estos grupos es monolítico. En especial en el caso de los hutus, es posible distinguir diferencias regionales, por ejemplo entre los hutus del norte y los hutus de la región central.

La gran mayoría de los estudiosos de la sociedad rwandesa reconocen que antes de la invasión colonial las estructuras sociales y políticas tenían como base un sistema de autoridad organizado en términos jerárquicos y un sistema clientelar

[3] En kinyarwanda (la lengua nacional) los términos batwa, bahutu y batutsi son la forma en plural de los gentilicios mutwa, muhutu y mututsi, los cuales corresponden a la forma en singular. En este trabajo, para evitar posibles confusiones, se utiliza la forma que correspondería en español al plural: twas, hutus y tutsis.

[4] C. Newbury, 1988, *The Cohesion of Oppression: Clientship and Ethnicity in Rwanda, 1860-1960*, Nueva York, Columbia University Press; R. Cornevin, 1975, *Histoire de l'Afrique*, tomo 3, París, Payot, pp. 421-479.

buhake), del cual se desprendía una compleja red de relaciones le subordinación entre los dos grupos más importantes —hutu · tutsi. Sin embargo, no hay consenso entre estos estudiosos n cuanto a la definición de estos grupos, sus orígenes, la naturaeza del sistema político antes de la colonización y el proceso le integración que desembocó en la existencia de una cultura, ına lengua —kinyarwanda—, creencias religiosas, un territoio y una historia compartidas entre los tres grupos.

El proceso de expansión del reino de Rwanda, como sosiene R. Lemarchand,[5] se llevó a cabo mediante movimientos nigratorios sucesivos de pastores hima/tutsi, que bajo el iderazgo de un clan real extendieron su dominio sobre los ıueblos locales de cultura bantú (hutus), asimilando en forma ırogresiva en la cultura pastoril las costumbres y tradiciones le estos últimos. Este proceso pudo haber comenzado entre ɔs siglos X y XIV, mediante conquistas y de distintas formas de similación pacífica (sobre todo matrimonios) y concluyó a inales del siglo XIX o incluso a inicios del XX, a la sombra de la xpansión colonial europea. La cohabitación forzosa en un espaio geográfico reducido, los matrimonios y el comercio —ocurrilos hace más de un siglo—, probablemente sean los elementos lave que explican la integración social de estos grupos, hasta al grado que actualmente es difícil para los estudiosos especifiar la naturaleza de la distinción entre twas, tutsis y hutus.[6] Conıiderados como tres "razas" o como tres grupos étnicos durante ı colonización,[7] para la gran mayoría de los autores contempoáneos consultados —Lemarchand, Uvin y Newbury entre otros— ıo son tres grupos étnicos distintos, sino uno solo, internamen-

[5] René Lemarchand, 1966, "Power and stratification in Rwanda. A reconsidera-on", *Cahiers d'Études Africaines* VI (24):598.

[6] Esta dificultad para establecer la naturaleza de la distinción entre twas, hutus y ıtsis se aplica también al caso de Burundi. Véase René Lemarchand, 1966; René Lemarhand, 1995, *Burundi: Ethnic Conflict and Genocide*, Washington/Nueva York, Woorow Wilson Press-Cambridge University Press; Jean-Pierre Chrétien, 1993, *Burundi. 'Histoire retrouvée*, París, Karthala; Jean-Pierre Chrétien, 1992, "Le défi de l'intégrisme :hnique dans l'historiographie africaniste", *Politique Africaine* (46):72-75; Michel Elias Danielle Helbig, 1991, "Deux mille collines pour les petits et les grands Radioscopie es stétereotypes hutu et tutsi au Rwanda et au Burundi", *Politique Africaine* (42):65-3; Cyprian F. Fisiy, 1998, "Of journeys and border crossings: return of refugees, lentity, and reconstruction in Rwanda", *African Studies Review* 41 (1):19-20.

[7] Michel Elias y Danielle Helbig, 1991, p. 66.

te dividido por distinciones socioeconómicas —según algunos autores— o por distinciones entre clanes —para otros autores— en una sociedad jerárquicamente estructurada.

La complejidad de la definición de la naturaleza de las distinciones internas es ahondada por su vinculación con la mitificación de la historia, motivada por intereses políticos. Los actuales habitantes arribaron al "país de las mil colinas"[8] en momentos históricos distintos.[9] Las dos versiones dominantes comparten esta tesis. Sin embargo, mientras que en una vertiente se afirma que se trata de un solo grupo étnico internamente diferenciado, la segunda —considerada como la versión oficial hutu— califica la llegada de las migraciones tutsis provenientes de Abisinia (Etiopía) o de Egipto —entre los siglos XIV y XVI— como una invasión de las tierras del grupo hutu, que habría llegado a la zona antes del siglo XIV, procedente de África central. Independientemente de la validez de alguna de estas dos versiones, como observa Peter Uvin,[10] en la crisis de 1994 la gran mayoría de la población rwandesa percibía las fracturas internas como expresión de la diferenciación étnica.

La discusión en torno a la naturaleza del sistema político antes de la invasión colonial aporta información relevante para analizar, entre otros aspectos, las relaciones de cooperación y conflicto entre tutsis y hutus en las distintas partes del país y el surgimiento tanto de la violencia política como de la oposición desde finales de los años 1950. Es importante tomar en cuenta que antes de la colonización Rwanda no constituía una unidad integrada. A grandes rasgos, podían distinguirse dos regiones: el noroccidente y el resto del territorio, con su núcleo en la región central.

Al inicio de la penetración colonial europea (1898), el reino de Rwanda tenía "un rey tutsi y una corte predominantemente tutsi".[11] Sin embargo, mientras que para algunos autores se

[8] Rwanda es conocido como el *pays des mille collines*. El término *colina* designa tanto un rasgo físico de la geografía local como la unidad de base (que expresa relaciones de proximidad entre los habitantes) de la sociedad rwandesa.

[9] Edward A. Alpers, "Eastern Africa", *The Cambridge History of Africa*, vol. 4, Cambridge Univ. Press, 1975, p. 500.

[10] Peter Uvin, 1997, "Prejudice, crisis, and genocide in Rwanda", *African Studies Review* 40 (2):94.

[11] *Ibid.*, p. 92.

trataba de un sistema centralizado pero flexible, percibido como legítimo por la gran mayoría de la población aunque era altamente desigual, para otros el alcance del poder del reino de la parte central del país era relativo. Esta divergencia de opiniones obliga a hacer una referencia a una de las principales discontinuidades históricas: el desarrollo desigual entre las zonas central y sur y la zona noroccidental del país. Mientras que en la parte central y sur se encontraba un reino tutsi con una población formada tanto por tutsis como por hutus; hasta finales del siglo XIX en la parte noroccidental había pequeños reinos hutus, con poca población tutsi, la cual no tenía poder político.

R. Lemarchand[12] retoma la tesis de la "premisa de la desigualdad", elaborada por Jacques Maquet, para explicar las relaciones de poder entre la oligarquía tutsi y la población hutu en el reino nuclear de Rwanda. De acuerdo con J. Maquet, la "premisa de la desigualdad", que regulaba toda la vida social y política, consistía en afirmar que la desigualdad —definida por la pertenencia a cada grupo— era una condición natural de los rwandeses. Tenía como fundamento el prejuicio de que los tutsis —considerados como superiores— y los hutus —calificados como inferiores— nacían con dones físicos y psicológicos desiguales y por lo tanto tenían derechos y obligaciones diferentes.[13]

En cuanto a las elites tutsis, esta premisa justificaba su monopolio de las posiciones de bienestar y de influencia y al mismo tiempo las obligaba a proteger a la población hutu, que a su vez debía realizar tareas serviles. El *buhake* (sistema clientelar) permitía la institucionalización de las relaciones de inferioridad-superioridad, atenuando el carácter injusto de la organización sociopolítica —al crear derechos y obligaciones recíprocos—, favorecía la cohesión social y la estabilidad y era el fundamento de las relaciones políticas. El ejército era un instrumento básico de control social y una de sus funciones era inculcar las cualidades consideradas como "esencialmente tutsi" (coraje, valentía, autocontrol), lo que contribuía a dar legitimidad a la desigualdad. Según R. Lemarchand, estos factores desembocaron en la creación de una organización muy centralizada aunque flexi-

[12] *Cit. pos.* René Lemarchand, 1966, pp. 593-595.

[13] No hay consenso entre los autores en cuanto a si la desigualdad antes de la invasión colonial estaba realmente fundada en diferencias físicas o sólo psicológicas.

ble, que tenía como cabeza al rey (*mwami*), quien ejercía un control efectivo sobre la población, la tierra y el ganado.

En cambio, en la parte noroccidental poblada de manera predominante por pueblos de cultura bantú (hutu) había diferentes formas de organización política: junto a pequeños reinos centralizados había sociedades autónomas, que aglutinaban a varios linajes.[14] Las relaciones entre estas sociedades hutus y el reino nuclear tutsi, en la parte central, no eran uniformes y variaban de una época a otra y de una comunidad a otra: podían ser relaciones de coexistencia pacífica o de guerra, sobre todo cuando el reino nuclear tutsi intentaba suprimir la autonomía de los jefes hutus. En este caso, el poder era el principal instrumento utilizado por las elites tutsis para imponer su dominio y por lo tanto las relaciones entre tutsis y hutus podían convertirse en una lucha por el poder. Sin embargo, es importante destacar que de acuerdo con la tradición oral, antes de la invasión colonial no hubo periodos de guerra prolongados entre el reino nuclear y las otras sociedades locales —pequeños reinos o comunidades autónomas— y en un mismo espacio geográfico solían coexistir en forma pacífica comunidades hutus, tutsis y twas.[15]

El reino tutsi —en la parte central— logró extender su dominio en la región noroccidental —con el sometimiento de los pequeños reinos hutus— con la ayuda primero de los conquistadores alemanes y después con el apoyo belga.

El periodo colonial

Con el efímero colonialismo alemán y más tarde bajo el colonialismo belga,[16] surgieron nuevas fuentes de poder y de privilegio, vinculadas con el ejercicio del dominio colonial y en

[14] R. Lemarchand, 1966, p. 605.

[15] R. Lemarchand, 1994, "Managing transition anarchies: Rwanda, Burundi, and South Africa in comparative perspective", *Journal of Modern African Studies*, 32 (4):588.

[16] Al concluir la Primera Guerra Mundial, Alemania perdió sus colonias en África. La Sociedad de Naciones otorgó a Bélgica la administración de Rwanda —bajo la forma de mandato internacional— y años más tarde, con la creación de la ONU, asumió la forma de protectorado internacional. B. Jewsiewicki, 1986, "Belgian Africa", en A. D. Roberts (ed.), *The Cambridge History of Africa, vol. 7: from 1905 to 1940*, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 474-475.

eneficio de personas tutsis. La administración belga, a partir el prejuicio[17] de que los tutsis eran más similares a los euroeos [*sic*], instituyó un rígido sistema de clasificación étnica, asado entre otras cosas en la medición de la nariz y del cráneo -lo que dio origen al mito de asociar ciertas características sicas con un grupo específico— e impuso un sistema oblígatoio de identificación en el que se establecía la pertenencia étnica.

Estos hechos, aunados al acceso privilegiado de los tutsis a ı educación, a los puestos de trabajo en la administración y en l ejército,[18] acentuó las diferencias entre la parte central y sur el extremo noroccidental y volvió más complejo y profuno el conflicto entre tutsis y hutus.

Bajo la colonización belga, aunque se mantuvo formalmene el reino en Rwanda, cambió la naturaleza del sistema: asumió n carácter mucho más centralizado, desigual, explotador y se ıcrementó y se modificó políticamente el poder del rey y de la lite tutsi —que se redujo en tamaño— a cambio de su colaboraión con la administración colonial y en detrimento del resto e la población —predominantemente hutu aunque también abía tutsis— muchas veces sometida a formas de trabajo obliatorio. Al mismo tiempo que la discriminación racial domina·a las estructuras coloniales, la estructuración jerárquica de la ociedad se volvió más rígida: con los europeos en la cúspide, eguidos por la elite tutsi —convertida en *évolué*— y por el resto e la población tutsi, los hutus y sobre todo los twas quedaron n los estratos más bajos, sin privilegios y sin prestigio social.[19] In ese contexto, no es extraño que se atribuya al colonialismo elga la introducción del conflicto étnico crónico en ese país.[20]

[17] Se tomaban como base prejuicios que clasificaban a los tutsis como "raza amitica", a los hutus como "raza negra" y a los twas como una "categoría subhumana e pigmeos". M. Elias y D. Helbig, 1991, p. 66.

[18] Peter Uvin, 1997, p. 95; Catherine Newbury, 1992, "Rwanda: recent debates ver governance and rural development", en G. Hyden y M. Bratton (eds.), *Governance nd Politics in Africa*, Boulder, Lynne Rienner, p. 196.

[19] P. Uvin, 1997, p. 96; Crawford Young, 1984, "Zaire, Rwanda and Burundi", n M. Crowder (ed.), *The Cambridge History of Africa, vol. 8: From c. 1940 to 1975*, Cambridge, Cambridge University Press, p. 705; Michel Elias y Danielle Helbig, 991, p. 67.

[20] Jean-Hervé Bradol y Anne Guibert, 1997, "Le temps des assassins et l'espace umanitaire, Rwanda, Kivu, 1994-1997", *Hérodote* (86-87):117; Jean-Pierre Chrétien, 993, pp. 313-315.

En la década de 1930 surgió un conflicto, aparentemente sin relevancia, cuando el rey tutsi de Rwanda se negó a aceptar que la autoridad de la iglesia católica local estuviese por encima de la suya. La iglesia declaró hostil al rey tutsi y en forma paulatina empezó a manipular la imagen de los hutus como un pueblo oprimido por la monarquía tutsi y a estimular la fundación de escuelas misioneras en zonas rurales hutus,[21] lo que permitió tanto el surgimiento de una pequeña elite intelectual como la difusión de los principios del humanismo cristiano entre los hutus. A partir de estos hechos, la elite tutsi vinculada con la monarquía empezó a ver a las misiones católicas y protestantes como una amenaza.

En la década de los cincuenta, en el marco de la colonia, diversos factores[22] favorecieron, por un lado, la lenta revalorización del grupo hutu —calificado como víctima de los tutsis—; por otro, la elaboración de una conciencia política entre la población rural hutu —marcada por un profundo resentimiento social— y, por último, la creación de organizaciones para la defensa de los intereses hutus, frente al incuestionable predominio de la elite tutsi: aunque no todos los tutsis eran ricos, todos aquellos rwandeses que durante la colonización se volvieron ricos y poderosos eran tutsis. Como sostiene C. Newbury, en los últimos años de la colonización, el conflicto entre tutsis y hutus no sólo era de carácter étnico, sino que reflejaba también diferencias de clase social.[23]

A finales de los años 1950 habían sido formados cuatro partidos políticos en Rwanda —dos predominantemente hutus y dos predominantemente tutsis— y habían empezado a brotar las primeras manifestaciones independentistas. En ese contexto, entre 1959 y 1962 tuvo lugar la llamada "revolución social", encabezada por algunos sectores de la elite hutu. Empezó con incidentes violentos en la parte central, continuó con las primeras matanzas en la historia de Rwanda —sobre todo en la parte norte del país— provocando la muerte de miles

[21] M. Elias y D. Helbig, 1991, p. 67.

[22] Entre otros factores pueden citarse la excesiva carga impositiva, el trabajo forzado y el comportamiento autoritario de jefes tradicionales y de funcionarios coloniales.

[23] C. Newbury, 1992, p. 196; Bradol y Guibert, 1997, p. 118.

de hutus y de tutsis. A partir de ese momento, en la historia de Rwanda las matanzas serían un fenómeno recurrente.[24]

Cuando la violencia se extendió a todo el país, en la administración belga —probablemente influida por la iglesia católica local— se registró un cambio: considerando que la elite tutsi tendía a ser radical y que los hutus —"gracias a la acción civilizadora de los belgas"— habían empezado a perder sus "complejos de inferioridad" [*sic*], dejó de apoyar a sus aliados tradicionales, los tutsis, para respaldar a la emergente elite hutu.

En enero de 1961, en una extraña acción promovida por la elite hutu y probablemente con el consentimiento encubierto de la administración colonial, se proclamó el nacimiento de la República de Rwanda, derrocando a la monarquía tutsi.[25] Bajo la presión de la ONU, este cambio de sistema fue legitimado con un referéndum, en septiembre de 1961. Estos hechos tuvieron un fuerte impacto entre la población tutsi: muchos se refugiaron en los países vecinos de Burundi, Tanzania, la parte este de la entonces colonia belga del Congo y en especial en Uganda.[26]

El Estado independiente

En julio de 1962 Rwanda logró la independencia, con un gobierno dominado por un partido pro hutu y fuertemente antitutsi y con una Asamblea Nacional electa. Durante la primera República (1962-1973), el gobierno de G. Kayibanda introdujo el sistema de partido único e intentó crear un aparato estatal fuerte y centralizado, encarcelando, matando o expulsando a todos los políticos tutsis influyentes y a algunos políticos hutus moderados. De esa época datan las primeras operaciones militares planeadas y ejecutadas fríamente por grupos vinculados con el gobierno, en contra de los tutsis y de hutus modera-

[24] R. Lemarchand, 1994, p. 589.

[25] Jean-Pierre Chrétien, 1993, pp. 423-426; C. Young, 1984, pp. 713-714; C. Newbury, 1992, p. 197.

[26] Ese éxodo de refugiados —y su posterior regreso a Rwanda— explica el hecho de que en 1996 se estimaba que 6 de cada 10 habitantes de la capital rwandesa eran tutsi angloparlantes. *Cf. Keesing's* 42 (1), 1996, p. 40890.

dos, con la lenta génesis de una cultura política del terror. Adoptó un discurso basado en el desarrollo rural, que entre otras cosas estaba orientado a convertir al campesinado hutu en la base de legitimación de un Estado caracterizado por la concentración excesiva de poder en manos de gente hutu de la región central (de donde provenía Kayibanda), lo que acrecentó las tensiones regionales, y por su incapacidad para debilitar las fuentes de conflicto entre hutus y tutsis, con el estallido de una nueva matanza de tutsis, a finales de 1963 y principios de 1964. En forma contradictoria, durante el gobierno de Kayibanda siguió siendo muy alto el número de tutsis que ocupaba cargos de profesores y empleados asalariados o eran estudiantes de nivel superior.

A finales de 1972 y principios de 1973 estalló una nueva reacción violenta antitutsi en Rwanda, que tuvo como antecedente el genocidio —generalmente ignorado— de hutus a manos de tutsis en Burundi.[27] Esa ola de violencia comenzó con ataques físicos a estudiantes y trabajadores tutsis, quienes eran expulsados de sus actividades. Sin embargo, en algunas partes del país también fueron saqueadas propiedades de prósperos hutus y amenazados hutus y tutsis adinerados, lo que permitió apreciar que en el conflicto se mezclaron tres niveles de tensiones: entre tutsis y hutus, entre las distintas regiones hutus y tensiones de clase al interior de la sociedad rwandesa. Ese estallido de violencia facilitó el proceso que conduciría al predominio político de hutus norteños —quienes formaban el grupo mayoritario en el ejército— y a la toma del poder —mediante un golpe de Estado— llevado a cabo por el general Juvénal Habyarimana, en julio de 1973,[28] con la expulsión del poder de los hutus de la zona central.

Como consecuencia del golpe de Estado de 1973 el partido único del depuesto G. Kayibanda fue declarado ilegal y hasta 1975 quedaron prohibidas las actividades partidistas. En ese año, Habyarimana creó un nuevo partido único, el MRND (Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement),

[27] Entre abril y noviembre de 1972 se estima que entre 100 mil y 200 mil hutus fueron asesinados en Burundi, bajo un gobierno dominado por tutsis. Véase René Lemarchand, 1995.

[28] C. Newbury, 1992, p. 197.

que oficialmente integraba a todos los ciudadanos rwandeses, estableciendo como metas la unidad nacional, la democracia responsable y, sobre todo, la movilización de la población con el fin de lograr el desarrollo. Casi de inmediato, el desarrollo se convirtió en el discurso de legitimación del sistema.[29] Como único candidato presidencial, Habyarimana fue elegido jefe de Estado en 1978 y reelecto en 1983 y 1988.

Las dos caras de un sistema político

En la segunda República (1973-1994), el gobierno de J. Habyariamana tenía una buena imagen internacional: a pesar de ser un país pequeño, pobre y eminentemente agrícola, hasta 1986 era considerado un país relativamente exitoso, tomando en cuenta indicadores como el nivel de desarrollo —calificado como moderado—, una balanza de pagos favorable, un nivel bajo de endeudamiento externo —lo que le permitió escapar hasta 1990 de los ajustes estructurales del Banco Mundial— y, a partir de 1980, la adopción de una política de "liberalismo planeado", con la que se pretendía hacer coincidir el desarrollo de la población rural —que constituye 92% de la población total, la gran mayoría habitantes de colinas aisladas, al margen de la economía monetaria y con una cultura cimentada en valores comunitarios— con el desarrollo acelerado de un capitalismo sin restricciones.

El sistema político era considerado más o menos democrático, legitimado internamente con elecciones regulares y con la aparente aplicación de mecanismos para armonizar los intereses étnicos y regionales y, sobre todo en el nivel internacional, por la manipulación exitosa de un discurso de desarrollo, con énfasis en el sector rural y que comprendía construcción de carreteras, el establecimiento de clínicas de salud pública, un programa de reforestación y la creación de pequeñas industrias manufactureras. Estos factores se traducían en una aparente estabilidad económica y política, en un contexto regional explosivo.

[29] P. Uvin, 1997, p. 99.

La estabilidad económica era frágil, como quedó demostrado, a partir de 1986, con la caída de los precios internacionales del café, que constituía 80% de las exportaciones. La estabilidad fue producto de distintos factores, entre los que destacaban la habilidad del gobierno para obtener ayuda externa, para aprovechar la coyuntura favorable creada por las dificultades económicas de los países vecinos (Zaire, Uganda, Tanzania) y para beneficiarse de su posición estratégica en una zona conflictiva.

Contrastando con el discurso oficial basado en la "cooperación entre grupos étnicos", la sociedad rwandesa asumió nuevas características: se agudizaron los viejos conflictos y surgieron nuevas tensiones sociales. El gobierno de J. Habyarimana —al igual que su antecesor— mantuvo el sistema de identificación étnica del periodo colonial. Además, formalizó un sistema de "cuotas étnicas",[30] que pretendía regular el acceso a puestos laborales altos y el ingreso a las escasas instituciones educativas de nivel secundario y universitario a los hutus, tutsis y twas con base en la representación proporcional del número oficialmente determinado de miembros de cada grupo. En este sentido, se asignó de manera autoritaria a los hutus 90% de esos puestos y del ingreso a instituciones educativas, a los tutsis 9% y a los twas 1%. Tanto las contradicciones como el principio de exclusión implícito en dicho sistema ahondaron las tensiones entre los tres grupos y al interior del grupo hutu. En forma contradictoria, la proporción de tutsis en el sector público —con excepción del ejército— era superior a 9% que supuestamente le correspondía;[31] sin embargo, los hutus del sur y los tutsis eran afectados por las mismas prácticas discriminatorias, que les impedía competir en igualdad de circunstancias frente a los hutus del norte.

A partir de 1980 se profundizaron las diferencias económicas y sociales. Por un lado, entre la elite próspera y la gran

[30] Jean-Pierre Chrétien, 1992, p. 77; C. Newbury, 1992, p. 198; P. Uvin, 1997, pp. 100-101.

[31] Según algunas fuentes —que como afirma P. Uvin es preciso tomar con cautela, debido a la posibilidad de manipulación política de los datos— aunque el número de tutsis inscritos en escuelas secundarias había decrecido desde los años de 1960, en las dos últimas décadas del régimen de Habyaramina los tutsis seguían teniendo una representación mayor que 9 por ciento. Véase P. Uvin, 1998, p. 101.

mayoría de la población, que sufría un proceso de pauperización, sobre todo en las zonas rurales, pero que también afectaba a Kigali, la capital rwandesa. Por otro lado, entre las distintas regiones del país, tomando en cuenta que casi 90% de las inversiones gubernamentales en desarrollo rural se concentraban en el centro y en el norte del país.[32] Para algunos funcionarios gubernamentales, expertos extranjeros y un pequeño sector de la elite hutu norteña, los proyectos de desarrollo rural se convirtieron en uno de los principales mecanismos para lograr un enriquecimiento rápido.

Bajo el gobierno de Habyarimana los principales problemas, gestados durante la colonia y prolongados durante la primera República independiente, se volvieron más agudos, en especial la centralización del sistema —concentrando el poder en manos de los hutus del norte—; las relaciones de explotación basadas en la distorsión del sistema clientelar (*bubake*); el despilfarro del gasto gubernamental; la corrupción y la represión de la disidencia; la acumulación de tierras agrícolas por parte de altos funcionarios públicos; la falta de alternativas de vida para la gran mayoría de la población;[33] la insuficiente producción alimentaria y la dependencia excesiva de la economía *vis-à-vis* la exportación del café y la ayuda externa. Como sostiene C. Newbury, las agencias de ayuda internacional estaban apoyando un aparato estatal que se encontraba cada vez más distante de la población.[34]

[32] C. Newbury, 1992, p. 203; René Lemarchand, 1994, p. 584; P. Uvin, 1997, p. 108; "La tragédie du Rwanda" (*dossier* preparado por Michel Gaud), *Problèmes Politiques et Sociaux* (752), 28 de julio de 1995.

[33] La falta de alternativas comprende, entre otras: una economía reducida sin capacidad para crear nuevos empleos y para expandirse y diversificarse; aguda escasez de tierras agrícolas; un sistema educativo sin capacidad para responder a la demanda escolar, en el que sólo una pequeña minoría urbana (6%) tiene acceso a educación secundaria, menos de 0.5% de los hombres y 0.1% de las mujeres tienen estudios universitarios concluidos; la esperanza de vida es de 40.5 años y una de las tasas de mortalidad infantil más altas del mundo.

[34] C. Newbury, 1992, p. 204.

La crisis humanitaria de 1994

Con el descenso de los ingresos por la venta de café, en 1986 comenzaron los años difíciles para la economía rwandesa, con la adopción de las primeras medidas de austeridad. Entre finales de los años ochenta y principios de los noventa, el desplome de los precios internacionales del café, una brutal hambruna en las regiones central, sur y occidente del país —que no provocó revueltas campesinas, sino muertos, un nuevo éxodo de refugiados hacia Tanzania y la agudización de la miseria rural—, el descenso de la producción alimentaria, la adopción de un programa de ajuste estructural —con la devaluación de la moneda— y las subsecuentes alzas en los precios de productos básicos y crecimiento de la inflación, estimularon el surgimiento de una severa crisis económica[35] —que golpeó especialmente a la población rural y a los sectores urbanos medios—, que a su vez creó el terreno favorable para el estallido de una profunda crisis política.

En el contexto de esta crisis surgieron dos fenómenos, que tuvieron un impacto decisivo en el futuro de ese país. En primer lugar, el creciente descontento interno, expresado en algunos casos en términos regionales (sobre todo por hutus del sur), y en otros casos expresado por voces críticas del régimen —la iglesia católica, intelectuales, profesores universitarios, periodistas— que exigían reformas políticas y denunciaban el autoritarismo del sistema, la dramática injusticia social y la miseria extrema de la gran mayoría de la población.

El gobierno pasó de la represión, en un primer momento, a la promesa de permitir la libertad de prensa y a la propuesta de un proceso de reformas políticas —en julio de 1990— que debía durar dos años y conducir, entre otros aspectos, a la elaboración de una nueva Constitución (basada en el multipartidismo), a la limitación de los poderes del jefe de Estado y a la creación de un sistema más tolerante y respetuoso de los derechos humanos.[36]

[35] P. Uvin, 1997, p. 106; Danielle Helbig, 1991, "Rwanda: de la dictature populaire à la démocratie athénienne", *Politique Africaine* (44), p. 97.

[36] Danielle Helbig, 1991, p. 99; Gérard Prunier, 1993, "Éléments pour une histoire du Front patriote rwandais", *Politique Africaine* (51), p. 132.

El segundo fenómeno tuvo lugar el 1 de octubre de 1990, con la irrupción violenta de un grupo fuertemente armado — FPR: Frente Patriótico Rwandés—, integrado por unos 2 mil 500 tutsis rwandeses refugiados en Uganda, en donde habían recibido el apoyo del gobierno de Yoweri Museveni. El FPR penetró por la frontera noreste, en donde estableció una zona de ocupación y proclamó sus exigencias de crear un gobierno democrático y de permitir el regreso de todos los refugiados.[37]

Los refugiados rwandeses en Uganda eran numerosos y de acuerdo con G. Prunier[38] se podían distinguir tres orígenes distintos. Por un lado, tutsis y hutus rwandeses que habían emigrado hacia territorio ugandés probablemente antes de la colonización. Por otro lado, los descendientes de rwandeses —la gran mayoría hutus— que en los años 1920-1930 abandonaron Rwanda para escapar de los excesos del colonialismo belga o para trabajar en las plantaciones de la entonces colonia británica de Buganda. En último lugar, los descendientes de los tutsis que escaparon de las matanzas desatadas durante la "revolución social", a finales de 1950 y principios de 1960.

Los refugiados tutsis en Uganda crearon en 1979 la Alianza Rwandesa para la Unidad Nacional, transformada en 1987 en el FPR. En Uganda, en la década de los ochenta, los refugiados rwandeses fueron víctimas de campañas de hostigamiento por parte del gobierno local, lo que favoreció la incorporación de muchos de estos rwandeses en las filas de la guerrilla opositora ugandesa, encabezada por Museveni. En 1986, el triunfo de éste puso fin a un largo periodo de inestabilidad en Uganda, con el inicio de un nuevo régimen neoliberal —que goza del apoyo de Washington—, inaugurando un clima de relativa estabilidad política y de progreso económico, aunque no exento de prácticas autoritarias. Las filas del FPR estaban integradas por rwandeses con ideales políticos muy diferentes entre sí, casi todos nacidos en el exilio y con una vaga imagen —muchas veces mitificada— de Rwanda. La propuesta política del FPR planteaba el combate al gobierno rwandés —califica-

[37] R. Lemarchand, 1994, p. 583; Gérard Prunier, 1993, p. 121; P. Uvin, 1997, p. 108; George S. Yacoubin Jr., 1999, "The efficacy of international criminal justice: evaluating the aftermath of the Rwandan genocide", *World Affairs* 161 (4), p. 187.

[38] G. Prunier, 1993, p. 125.

do como dictadura— y el fin del eterno exilio tutsi. Algunas fuentes sostienen que el reclutamiento de tutsis rwandeses en la guerrilla ugandesa había tenido como base la promesa hecha por Museveni de apoyarlos en su lucha en contra del gobierno de Habyarimana, promesa que cumplió poco después de llegar al poder. En los años 1980 el FPR fundó algunas células clandestinas al interior de Rwanda, reuniendo tanto a tutsis como a hutus —generalmente con estudios— opositores al régimen.

El desencadenamiento del conflicto fue precipitado por la "apertura" democrática del régimen: los dirigentes del FPR temieron que los argumentos de la lucha en contra de la dictadura y del regreso de los refugiados podrían perder validez.

La fase preparatoria del genocidio: 1991-1993

En los meses siguientes, el gobierno de Habyarimana manejó un doble discurso. Por un lado, intentó minimizar la dimensión del conflicto, declarando que había sido una invasión externa y que estaba controlada. Por otro lado, con el fin de lograr el apoyo de Francia —en el contexto de la profunda crisis económica rwandesa— presentó una imagen desmedida del incipiente conflicto. Como resultado, para "proteger a los extranjeros residentes en ese país", Francia y Bélgica enviaron contingentes armados y proporcionaron ayuda financiera al régimen de Kigali a inicios de 1991. Esta acción sería secundada por el gobierno zaireño de Mobutu.[39]

Después del primer ataque, el gobierno desató una ola de represión en contra de posibles disidentes y se produjeron las primeras matanzas del periodo 1990-1994. Prácticamente todas las células internas del FPR fueron destruidas y comenzó una campaña de satanización en contra de los hutus disidentes. En cifras oficiales, en los primeros seis meses del conflicto hubo más de 8 mil arrestos. Sin embargo, poco a poco los ataques del FPR desencadenaron una guerra civil, que logró desestabilizar las frágiles estructuras políticas y económicas de Rwanda.

[39] Prunier, 1993, pp. 133-134.

El programa de reformas de Habyarimana en realidad sólo ›lanteaba cambios políticos menores —con la promulgación le una nueva Constitución y el cambio de nombre al partido ¡obernante—,[40] que seguía excluyendo a la gran mayoría de la ›oblación de la vida política e intentaba manipular las reformas ›ara permitir perpetuarse en el poder. Sin embargo, el inicio le los ataques del FPR volvió más complejo el proceso de refor- na. Ante el crecimiento de la actividad armada, el gobierno ntrodujo severas medidas de seguridad, empezaron las cam- ›añas de reclutamiento —que tiempo después se convertirían :n masivas— para el servicio militar, lo que estimuló el brote le manifestaciones de rechazo a la política gubernamental y a avor de los partidos de oposición, en medio de una creciente ›olarización de las relaciones entre hutus y tutsis y del surgi- niento de profundas fracturas entre los hutus con estudios.

Aunque casi todos los partidos de oposición formados a ›artir de 1991 eran políticamente plurales y tenían una plata- orma conjunta tutsi-hutu, ninguno representaba a los twas ni ıl campesinado empobrecido y a corto plazo sus liderazgos quedaron fracturados por el conflicto hutu-tutsi.

Cuando se extendió la lucha armada, el gobierno intentó ecuperar algunas de las demandas planteadas por la oposición / por el FPR. En ese sentido, se suprimió la clasificación de ıutu, tutsi y twa que aparecía en las credenciales de identifica- :ión, lo que implicaba abandonar el polémico "sistema de cuo- :as". Por otro lado, bajo presiones internacionales, Habyari- nana aceptó la formación de un gobierno de transición, con a participación de tres partidos de oposición, además de su ›ropio partido. El nuevo primer ministro —de un partido de ›posición— propuso la realización de negociaciones con el FPR ›ara poner fin a la guerra y llevar a cabo elecciones democrá- :icas en 1993. Casi de inmediato, el gobierno de transición :ntró en crisis, en medio de tensiones entre norteños y sureños, le amotinamientos en el ejército y del estallido de actividades :erroristas (aparentemente llevada a cabo por simpatizantes del ›artido de Habayarimana).

[40] La Constitución de junio de 1991 introdujo el cargo de primer ministro y el nultipartidismo.

La atención de los analistas internacionales se concentró en observar las pugnas entre la elite en el poder y los nuevos actores políticos —los partidos de oposición— que involucraban básicamente a las clases instruidas y urbanas: aproximadamente el uno por ciento de la población. No obstante, los acontecimientos transcurridos en las colinas de Rwanda durante la guerra civil, entre 1991 y principios de 1994, fueron poco divulgados, a pesar de que miles de rwandeses —sobre todo tutsis— fueron asesinados: en ese periodo se registraron por lo menos cuatro grandes matanzas en zonas rurales. A grandes rasgos, el gobierno siguió una política errática, oportunista e hipócrita frente al proceso de democratización y a la guerra civil. Tomando en cuenta las características autoritarias y las prácticas excluyentes del régimen, el papel que el FPR podía jugar en la transición empezó a ser mitificado, al calificarlo como la gran fuerza opositora y como una alternativa democrática.

Desde el inicio de la guerra civil, eran frecuentes las matanzas de tutsis llevadas a cabo por el ejército y por nuevos grupos armados hutus. No eran un fenómeno espontáneo, por el contrario, se inscribían en una triste e ignorada historia de prácticas de exterminio y respondían a objetivos políticos. Durante la fase más crítica y menos conocida de la guerra civil, fueron creados los instrumentos básicos que facilitarían el genocidio en gran escala de 1994. Entre otros instrumentos destacan la creación de grupos paramilitares y la organización de la propaganda antitutsi. En el primer caso, pueden mencionarse la creación de los escuadrones de la muerte Réseau Zéro, de la milicia Interahamwe y del grupo de choque Akazu. En el segundo caso sobresale la creación de la estación de radio de las mil colinas.

Ante la incapacidad del ejército rwandés de derrotar militarmente al FPR, hizo su aparición una organización terrorista, conocida como Réseau Zéro. Directamente identificada con el brazo armado del gobernante MRND —llamada milicia Interahamwe: "aquellos que combaten juntos"—[41] y con el yerno de

[41] En sus orígenes, Interahamwe era el nombre del ala juvenil del partido, el MNRD. En forma paulatina, se convirtió en un auténtico grupo de choque de los hutus extremistas, razón por la cual empezó a ser conocida como "milicia". A partir de 1994, la milicia Interahamwe estableció su base en Kivu (región este de Zaire, hoy

Habyarimana, Réseau Zéro inició sus actividades en áreas rurales en la parte este del país, llevando a cabo campañas de intimidación en contra de campesinos, especialmente tutsis pero también en contra de hutus que tenían lazos de amistad o de parentesco con tutsis. Con la finalidad de destruir las bases de apoyo popular (reales o potenciales) del FPR, Réseau Zéro desplegó sus actividades terroristas en casi todo el país: saqueos, violaciones, torturas y matanzas. Con el crecimiento de la disidencia en Kigali, las operaciones de Réseau Zéro se extendieron a la capital.[42]

Entre la gente que rodeaba y protegía a la esposa de Habyarimana fue creado el grupo conocido como Akazu ("pequeña casa"), nombre que era dado antes de la colonización al grupo de allegados al rey. Comandado por la esposa del jefe de Estado, este grupo realizaba operaciones paramilitares selectivas, en contra de personas poderosas, intelectuales o activistas de derechos humanos opositores al régimen.

En abril de 1993 fue fundada la estación denominada Radiotelevisión Libre de las Mil Colinas, utilizada por el gobierno para reafirmar entre la población rural el miedo, el odio y la venganza vinculados con un pasado distorsionado y con apego al pensamiento mágico: los tutsis eran presentados como seres malignos, provocando miedo e incertidumbre frente al avance del FPR.

En el análisis del comportamiento del régimen de Habyarimana que puede ser considerado como genocida, las agresiones en contra de los twas siguen siendo un capítulo ignorado. Con base en indicadores esenciales —la mortalidad infantil, la desnutrición, el analfabetismo y el decrecimiento sostenido de la población— se considera que es un grupo humano en proceso de extinción. Durante la guerra civil, tuvo lugar un hecho que limita aún más sus posibilidades de sobrevivir: mi-

---

República Democrática del Congo) y tendría un papel decisivo en las matanzas encabezadas por antiguos miembros (hutus) del ejército rwandés —y respaldados por las fuerzas armadas de Zaire— en contra de tutsis en los campos de refugiados en esa zona. La milicia Interahamwe es considerada el ala armada más radical de los hutus. *Keesing's*, 42, pp. 41130, 41310.

[42] Francois Misser, 1992a, "Zero network strikes", *New African* (303), pp. 40-41; Francois Misser, 1993, "Inquiry into death squads", *New African* (304), p. 16.

les de twas —quienes históricamente habían habitado en los bosques de Gishwati— fueron expulsados de esa zona, para llevar a cabo un proyecto de desarrollo financiado por el Banco Mundial —cría de ganado suizo. Ese hecho fue ignorado tanto por Rwanda como por Occidente.[43]

A partir de 1992 empezaron a surgir las primeras revelaciones de la complicidad del régimen de Habyarimana en las matanzas de tutsis en zonas rurales y en las acciones terroristas en Kigali, lo que minó la imagen internacional del gobierno, debilitado por la crisis económica. Durante la guerra civil, el FPR también realizó campañas de intimidación en contra de la población civil, incluidas las matanzas, que pretendieron ser justificadas como "acciones bélicas", pero que en realidad eran actos de venganza política.

Tanto el gobierno rwandés como el FPR cometieron graves violaciones de los derechos humanos y las víctimas fueron los habitantes más vulnerables: los campesinos pauperizados. Si se considera la complejidad del conflicto histórico, es muy difícil establecer quién inició las actividades genocidas a partir de 1991. Además ese tipo de indagatoria es irrelevante: sería fundamental llevar a cabo una investigación que permita esclarecer si los comportamientos de los dos bandos durante la guerra civil pueden ser tipificados como genocidio.

En medio de una profunda crisis, el gobierno de Habyarimana, obligado por las presiones de países vecinos, de gobiernos occidentales y del FMI, después de prolongados meses de negociaciones,[44] en agosto de 1993 firmó con el FPR el Acuerdo de Arusha, que formalmente puso fin a la guerra civil y que comprendía: *1)* la repatriación de los refugiados tutsis; *2)* una fórmula para compartir el poder, con la formación de un gobierno y de un parlamento de transición, con la participación de seis partidos, incluidos el FPR y el partido en el poder; *3)* la

[43] Francois Misser, 1992b, "Forgotten tribe claims its rights", *New African* (300), p. 43.

[44] Tanto entre el gobierno como en el FPR había predominado la línea dura, en contra de las negociaciones de paz. Para el gobierno, las matanzas eran manipuladas para lograr la relativa unión hutu en contra del FPR, entre cuyas filas había un sector radical favorable a la guerra prolongada, que permitiera la destrucción del régimen. *Keesing's*, 1993, 39, pp. 39257-8.

creación de un ejército nacional, que integrara a soldados del ejército regular y del FPR y, *4)* con los auspicios de la ONU, la creación de una fuerza de paz que garantizara la aplicación de los acuerdos. En octubre de 1993, la ONU aprobó la formación de la Minuar I (Misión de las Naciones Unidas de Asistencia para Rwanda). A finales de ese año, se registró el arribo a Kigali de dos contingentes armados: en noviembre la Minuar (con tan sólo 2 mil 500 hombres sin equipo, sin instrucciones precisas y que desconocían la naturaleza) y en diciembre las tropas del FPR, según lo firmado en Arusha.[45]

Ese acuerdo de agosto de 1993 suscitó temores entre la poderosa elite hutu, sobre todo en los sectores extremistas, opuestos a cualquier hecho que pudiera limitar sus privilegios y contrarios a la idea de compartir el poder, no sólo con tutsis, sino incluso con otros partidos hutus. En ese contexto, a partir de finales de 1993 la elite hutu manipuló las diferencias entre hutus y tutsis para movilizar a la población hutu y organizar matanzas con fines políticos, transmitiendo a través de la radio a la población hutu que se acercaba la "batalla final" contra su gran enemigo histórico: los tutsis,[46] lo que desencadenó lentamente una espiral de violencia y odio que sería el antecedente inmediato del genocidio iniciado en abril de 1994.

Grupos defensores de los derechos humanos han aportado evidencias de la complicidad de Habyarimana, quien incitó a la población y al ejército hutus a llevar a cabo las matanzas en contra tanto de gente tutsi como de hutus moderados, sobre todo en el sur. Estos hechos no eran desconocidos en los foros de Naciones Unidas y de la Organización de la Unidad Africana (OUA) ni por los gobiernos occidentales: en enero de 1994 observadores de la ONU reportaron que extremistas hutus estaban organizando matanzas en gran escala.[47] Sin embargo, no hubo ninguna acción no militar internacional para detener el genocidio en su primera fase.

[45] Emmanuel Decaux, 1997, "Les Nations Unies et la région des Grands Lacs", *Politique Africaine* 68, p. 34.

[46] P. Uvin, 1997, p. 110; Jamie Frederic Metzl, 1997a, "Rwandan genocide and the international law of radio jamming", *American Journal of International Law* 91 (4), p. 629; Jamie F. Metzl, 1997b, "Information intervention: When switching channels isn't enough", *Foreign Affairs* 76 (6), pp. 15-16.

[47] Alan J. Kuperman, 2000, "Rwanda in retrospect", *Foreign Affairs* 70 (1), p. 96.

El genocidio y la intervención militar extranjera

Recurriendo a diferentes pretextos, Habyarimana había logrado impedir la entrada en vigor del Acuerdo de Arusha. Cuando su avión fue derribado, en compañía del presidente de Burundi, regresaba de una reunión cumbre, que debía dar paso finalmente a la aplicación del acuerdo. En ese contexto, el 6 de abril comenzó el genocidio en gran escala, que terminaría en julio de 1994. Al igual que las matanzas del periodo 1972-1973, la violencia política en Rwanda en abril de 1994 estuvo precedida por una nueva ola de matanzas en el vecino Burundi. En Rwanda, la violencia política comenzó en Kigali y después se extendió a todo el país: durante esos meses de infierno, sostiene David Newbury, en Rwanda no hubo una sola persona que permaneciera al margen.[48] En el contexto de la crisis, el FPR, encabezado por el tutsi Paul Kagame, derrocó al moribundo régimen rwandés, dando origen a la formación de un gobierno integrado por miembros del grupo tutsi y por algunos políticos moderados del grupo hutu.

Entre los aspectos más sobresalientes del genocidio están la rapidez con la que se llevó a cabo y la magnitud del fenómeno, no sólo por la cantidad de gente asesinada, sino también por la participación de población común en los actos genocidas, dirigidos por grupos vinculados al régimen: Réseau Zéro, Akazu e Interahamwe.

Aunque la prensa occidental presentó la crisis como producto de un enfrentamiento de "pueblos primitivos", la declaración de que se trataba de un genocidio de hecho destruyó ese argumento: retomando el texto de la Convención sobre el Genocidio[49] se afirmó que las matanzas habían sido una acción organizada, planeada y ejecutada de acuerdo con objetivos políticos, lo que implica personas que organicen en forma sistemática las acciones tendientes al exterminio de otro grupo humano. Como ha sido ampliamente demostrado, el uso de la radio, la creación de grupos paramilitares, la construcción deliberada de

[48] David Newbury, 1998, "Understanding genocide", *African Studies Review* 41 (1), p. 77.

[49] 1948, *Convention on the Prevention of Genocide and Punishment of the Crime of Genocide*, Nueva York, Organización de las Naciones Unidas.

una ideología de exclusión y la manipulación política fueron elementos determinantes para la realización del genocidio.

Entre abril y julio, ante la presencia de fuerzas de paz internacionales —primero Minuar I y después los comandos de la Operación Turquesa— fueron brutalmente asesinados entre 500 mil y un millón de rwandeses. Por un lado —en la fase más publicitada del genocidio— extremistas hutus dirigieron el asesinato de tutsis y de hutus moderados y opuestos al regimen de Habyaramina, sobre todo de la región sur.[50] En la segunda fase del genocidio, después de la toma del poder por parte del FPR, otros miles de rwandeses, predominantemente hutus, fueron victimados. Sin embargo, de manera incomprensible, cuando estallaron las matanzas en ese país africano, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió el retiro de la Minuar I, debido a que no había condiciones para que actuara en forma segura.

En círculos académicos occidentales ha tomado fuerza la tesis del "derecho"[51] que podrían tener los estados, o algún organismo internacional, de llevar a cabo una intervención *militar* en un Estado, sin la aprobación de las autoridades locales, con el fin de detener o de prevenir el sufrimiento o la muerte de la población civil. El núcleo del debate se ubica en el terreno de la *legitimidad* del uso de la fuerza militar en circunstancias en las que están en juego los derechos humanos de un sector de la población en algún país. Los que propugnan por este "derecho" afirman que está surgiendo un consenso internacional que sostiene que el principio de no-intervención será insostenible en el siglo XXI.

En la génesis de los estados modernos europeos el reconocimiento de la soberanía se convirtió en un principio político fundamental del orden internacional, por razones de orden

[50] Diversas fuentes estiman entre 500 mil y 800 mil el número total de muertos en el transcurso de esos meses. R. Lemarchand, 1998, "Genocide in the Great Lakes: Which Genocide? Whose Genocide?", *African Studies Review* 41 (1), p. 4, 7; David Newbury, 1998, p. 74.

[51] Es importante subrayar que la intervención militar *no* es un derecho, se trata simplemente de una tesis que lo propone como tal. Sin embargo, en la literatura especializada en relaciones internacionales se tiende a presentar en forma acrítica esta tesis con el nombre de "derecho". Para evitar confusiones, en este trabajo se retoma el término de derecho, pero es indispensable tomar en cuenta que no lo es.

y no por consideraciones de justicia. Los defensores de la tesis de la intervención por causas humanitarias afirman que este "derecho" estaría sustentado en la búsqueda internacional de justicia y su principal propósito sería la protección de los ciudadanos del Estado afectado.[52]

Los elementos que delimitan la intervención humanitaria son:[53] su carácter excepcional, sólo aplicable en circunstancias extremas; su finalidad, impedir que continúe una situación considerada como *inaceptable* para la *condición humana*; el objeto de la intervención debe ser un Estado soberano; la ausencia de consentimiento por parte de las autoridades del Estado afectado para la medida coercitiva; debe ser una acción deliberada para tratar de influir en el comportamiento interno del Estado afectado, y, sobre todo, la intervención debe estar guiada básicamente por un *sentimiento de humanidad.*

En el nivel político, el problema fundamental de esta tesis se deriva de la imprecisión de los argumentos centrales: cuáles son los criterios para determinar la autenticidad de la *motivación* (el *sentimiento humanitario*) para intervenir, qué tipo de situación concreta puede ser calificada como "circunstancias extraordinarias" y hasta qué grado de deterioro debe llegar una situación para ser calificada como *inaceptable.* La experiencia en Rwanda mostró que la decisión para intervenir es esencialmente política y está guiada por criterios de orden internacional, no de justicia.

El genocidio de 1994 desencadenó fuertes críticas hacia la ONU y los gobiernos occidentales por su actitud indecisa ante este hecho, incapaces para prevenirlo, a pesar de las voces de

[52] Véase C. Greenwood, 1993, "Is there a right of humanitarian intervention?", *The World Today* 49 (2), pp. 35-36; Roberts, Adam, 1993, "Humanitarian war: Military intervention and human rights", *International Affairs* 69 (3), pp. 429-449.

[53] Hay una amplia literatura en el campo de las relaciones internacionales que abordan el derecho de intervención humanitaria, entre otros pueden ser mencionados: D. Mapel, 1991, "Military intervention and rights", *Millennium* 20 (1), pp. 41-55; C. Greenwood, 1993, "Is there a right of humanitarian intervention?", *The World Today* 49 (2), pp. 34-40; N. Rodley, *op. cit.*; I. Forbes y M. Hoffman (eds.), 1993, *Political Theory, International Relations, and the Ethics of Intervention*, Londres, St. Martin's Press; K. K. Pease y D. F. Forsythe, 1993, "Human rights, humanitarian intervention, and world politics", *Human Rights Quarterly*, 15 de mayo, pp. 290-314; Ch. W. Kegley, Jr. and M. G. Hermann, 1997, "Putting military intervention into the democratic peace", *Comparative Political Studies* 30 (1), pp. 78-107.

alarma, y, una vez desencadenado, no pudieron detenerlo. A pesar de la gravedad de la crisis, la ONU quedó paralizada. En el plano teórico, el conflicto presentaba las características básicas para definirlo como una intervención humanitaria. La ONU no pudo poner en marcha ese mecanismo, aparentemente por la falta de consenso en torno a sus cualidades, por el temor a involucrarse en un conflicto regional mal conocido, por los riesgos políticos que una intervención armada puede generar en una guerra tan violenta y por una nueva lógica internacional, que pretende que los conflictos sean resueltos regionalmente.

En este nivel, la principal contradicción reside en que la proclamada intervención por razones humanitarias no ocurrió, pero sin embargo entre 1990 y 1994 hubo formas de intervención armada abierta, que no responden a los criterios de definición de la intervención humanitaria. Pueden citarse la intervención iniciada en 1990, cuando los gobiernos de Francia y Bélgica enviaron tropas para defender al régimen. Aunque Bélgica se retiró, Francia mantuvo la intervención militar hasta finales de 1993. Otras dos intervenciones, en abril y en julio de 1994, ocurrieron cuando con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, Francia emprendió operaciones militares —conocidas como Operación Amaryllis y Operación Turquesa— con la finalidad inicial de detener las matanzas, proteger a la población civil que estaba en la zona bajo el control del gobierno local y crear un terreno favorable para la reactivación de la misión de la ONU. Sus esfuerzos estuvieron guiados esencialmente por intereses políticos y de seguridad: impedir el ingreso en Zaire de un gran flujo de refugiados, porque esto habría desestabilizado al deteriorado gobierno de Mobutu, demostrar que Francia seguía conservando la capacidad de intervenir militarmente en África y distanciarse de su tradicional apoyo incondicional al régimen de Habyarimana, acusado de prácticas de genocidio.

Un conflicto sin resolver

En los cuatro episodios de matanzas en la historia de Rwanda hasta 1994, la violencia ha sido dirigida tanto por la elite hutu

como por la tutsi, que han convertido la pertenencia a estas comunidades en el principal instrumento ideológico de la lucha por el poder. En 1994, se generó una dinámica viciada entre la difusión masiva de la propaganda, la concentración del poder en la elite hutu, la utilización sistemática de mecanismos de exclusión y de instrumentos de exterminio junto con una cultura política del terror. Los dos grupos son culpables de genocidio, que no fue perpetrado por personas aisladas con mentes patológicas, sino por gente común y corriente que fue acorralada ideológicamente por el terror: se trataba de matar o ser ejecutado. No parecía haber una salida. La elite hutu, debilitada por la oposición interna, por la guerra, por la crisis y por las presiones externas, pero decididas a no perder su poder, optó por una acción que no fue espontánea, sino para la que estaba preparada: el genocidio. Al involucrar a la población civil, los dirigentes pretendieron "diluir" la responsabilidad, lo que ha contribuido a distorsionar la memoria colectiva tanto de los hutus como de los tutsis, sobre todo si se toma en cuenta que el genocidio ha dejado profundas y dolorosas huellas en los sobrevivientes, quienes en un mecanismo inconsciente de autodefensa, pueden recordar parte del drama, pero también necesitan olvidar. Sin este mecanismo, sería imposible sobrevivir. En esa reescritura de la historia, la sombra del genocidio altera las percepciones tanto de los sucesos como del otro, el grupo enemigo. No es extraño, por lo tanto, que muchos hutus nieguen el genocidio.

El conflicto no está resuelto: las medidas represivas —como la creación de un tribunal internacional para juzgar los crímenes de guerra— no son la solución en una sociedad que ha vivido en un contexto de injusticia tan profundo que se ha perdido el sentido de la vida y se niega la esperanza.❖